

Los movimientos sociales en Bolivia

Por Dr. Raúl Prada¹

Al iniciar el nuevo milenio de la era cristiana, en Bolivia estalla una de las más grandes crisis de su historia, crisis múltiple, que atraviesa distintos planos de su composición estructural. Hablamos de una crisis económica galopante, en parte, por lo que tiene que ver con la crisis que arrastra el capitalismo desde la década de los setenta, en parte con los efectos destructivos de la aplicación de medidas neoliberales, llamadas del ajuste estructural, en pleno contexto de la globalización. Crisis política, que podemos caracterizar como crisis de la democracia formal, instaurada en 1982 como conquista popular, después de la huelga de hambre de las mujeres mineras. Esta democracia sufre su primer colapso cuando un Congreso, copado en su mayoría por las representaciones de la derecha termina haciendo imposible el gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP). La conspiración de los sectores empresariales y de los parlamentarios conservadores termina creando una situación insostenible, desde el punto de vista de la ejecución y legalización de políticas de Estado. El gobierno de Hernán Siles Suazo se ve obligado a renunciar un año antes de cumplida su gestión. A esta situación colabora la oposición de los sindicatos obreros y de organizaciones de izquierda opuestas a la UDP, que demandan el cumplimiento de medidas concretas a favor de las clases explotadas y la nación dependiente. La caída de la UDP va a traer como consecuencia la llegada al poder, después de las elecciones de 1985, de una coalición de derecha, llevando a la presidencia a nada menos que a Víctor Paz Estensoro, quien comienza el ciclo de políticas neoliberales, con un paquete de medidas de shock, para parar la hiperinflación. Este gesto político borra con el codo lo que se había escrito con la mano. El hombre que había firmado la ley de nacionalización de las minas en 1952 y la ley de reforma agraria en 1953, termina conculcando las medidas revolucionarias de aquel entonces, entregando en su última gestión los recursos naturales y la economía del país a las transnacionales, en pleno encadenamiento de la mundialización capitalista.

Los efectos de las políticas neoliberales se hacen sentir en la cuarta gestión de lo que se ha venido a conocer como el período de la democracia pactada, pactada entre los llamados partidos tradicionales de la derecha neoliberal, en la segunda gestión de los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada, esto es en el lapso de la segunda mitad de la década de los noventa. Aunque estos efectos demoledores sobre la economía nacional y el bienestar social comienzan a sentirse desde las primeras medidas de ajuste estructural aplicadas, la acumulación de los efectos son desastrosos después de doce años de políticas neoliberales. La pauperización alarmante de todas las clases, incluyendo a las clases medias, es una de las señales del deterioro extendido en la sociedad, salvo, claro está, con lo que ocurre con el pequeño sector oligárquico y la casta política, que terminan beneficiándose con la crisis y en la crisis. La desaparición del aparato productivo, el paro, la desocupación, la virtualización de la economía, son otras señales de los efectos destructivos de lapso del neoliberalismo en los escenarios nacionales. Estos efectos negativos en las condiciones de vida de la población forman parte del caldo de cultivo de los movimientos sociales recientes en Bolivia y en América Latina.

¹ Docente e Investigador. Coordinador del Doctorado de Epistemología de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Bolivia. Integrante del Colectivo de Investigación La Comuna.

Si bien es cierto que los movimientos sociales se gestan en una historia más larga, se enganchan con los ciclos largos de las luchas sociales, los recientes movimientos sociales comienzan, de manera determinada, al inicio mismo del período neoliberal, con la marcha por la vida de los mineros, en un intento desesperado de revertir el curso de los acontecimientos que se venían encima. Este período de gestación forma parte de la etapa de resistencia de las organizaciones sociales a las políticas económicas. Indudablemente debemos contar en esta narrativa con la emergencia de los movimientos indígenas de la Amazonia y el Chaco. La marcha por la dignidad y el territorio marca un hito importante en la historia de los movimientos sociales. Se incorporan a las luchas sociales contingentes indígenas que habían sido ignorados por el Estado y sometidos a la sombra por los terratenientes y las oligarquías del oriente del país. Hasta el año 2000 se desarrollan una gama de movilizaciones de sectores afectados por las políticas privatizadoras y las políticas de interdicción de la hoja de coca y desarrollo alternativo. Todas estas movilizaciones son significativas por las formas de resistencia que desatan contra los gobiernos de los partidos de la coalición de derecha, contra el marco aplastante de privatización y trasnacionalización, contra la espiral de corrosión y corrupción social y política que acompañan al descarnado neoliberalismo. Empero, todos estos procesos son todavía de resistencia. Los movimientos sociales inician su ofensiva durante la guerra del agua, en abril del 2000, en Cochabamba.

A partir de la guerra del agua el mapa político de Bolivia se modifica sustantivamente. Quedan en suspenso los partidos tradicionales, quedan suspendidos los poderes tradicionales del Estado, el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. La iniciativa se encuentra en manos de las organizaciones sociales y de los instrumentos políticos de los sindicatos y comunidades. Después de la guerra del agua, en septiembre del 2000 se da lugar a un gigantesco bloqueo de caminos que paraliza el país. Es un bloqueo de campesinos e indígenas. Quizás el antecedente inmediato a este bloqueo se encuentre en el bloqueo nacional de caminos de 1979, cuando la CSUTCB de aquel entonces, bajo la dirección de Genaro Flores, toma el control de los caminos, haciendo conocer una serie de demandas campesinas, además de oponerse a los fraudes electorales de los militares, que todavía se encontraban en el poder. La diferencia con aquel bloqueo de caminos es que el de septiembre del 2000 se genera en un contexto distinto y sin presencia de los partidos de izquierda, tampoco se encuentra presente el katarismo, la ideología indianista y las organizaciones políticas indígenas, conformadas en la década de los setenta. Es otro indianismo, más radical, vinculado a un marxismo crítico al izquierdismo, entonces un marxismo indianista, el que juega un papel importante en el desenvolvimiento de las acciones de masa. Las distintas marchas cocaleras cruzan el lapso de la ofensiva de los movimientos sociales. Se suman las marchas de prestatarios, jubilados y rentistas, además de los gremialistas y maestros. Repárese la figura esporádica de los legendarios mineros con sus guardatojos y dinamitas, después del motín policial de febrero del 2003. Llegamos así a una de las cumbres de la curva de los movimientos sociales, que se sucede en octubre del 2003. Acontecimiento conocido como la guerra del agua. Se expulsa al gobierno neoliberal de Sánchez de Lozada y se transita hacia una incierta transición política, después de una sustitución constitucional. Los movimientos sociales viven una especie de reflujo, espectando y esperando el cumplimiento de medidas favorables, durante el gobierno de transición de Carlos Mesa, quien fuera vicepresidente del anterior presidente expulsado por una insurrección pacífica. Se abre un nuevo horizonte político. Los movimientos sociales imponen una agenda, la llamada agenda de octubre, que de manera sintética se expresa en la exigencia de la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

La transición resulta siendo sinuosa además de incierta. El gobierno de Carlos Mesa y el Congreso no cumplen con la demanda de los sectores sociales. Prefieren oscilar hacia la derecha, dejándose presionar por las oligarquías regionales y por las empresas trasnacionales. Durante esta etapa de vacío político, vacío que deja el reflujó de los movimientos sociales, la derecha conspira con todos sus recursos, monopolio de los medios de comunicación, con el congreso, con los organismos multilaterales, con las trasnacionales, y hasta con el mismo gobierno, al que le imponen su propia agenda, a través de concentraciones y cabildos. Por lo menos dos son importantes, el cabildo de junio del 2004 y el de enero del 2005. Ambos efectuados en la ciudad de Santa Cruz. El gobierno de transición, en medio de dos agendas, las de los movimientos sociales y la de las oligarquías regionales, en medio de dos fuerzas encontradas, termina colapsando. El presidente renuncia. Este hueco en la presidencia obliga a una segunda sustitución constitucional, que trata de ser aprovechada por la derecha para imponer un gobierno de acuerdo a sus intereses. Conspira para imponer una sustitución constitucional que llegue al presidente del congreso, Hormando Vaca Diez, hombre plenamente a fin a los intereses de la oligarquía y de las trasnacionales. Empero, como salido de su letargo, los sectores populares reaccionan ante esta embestida y vuelven a tomar el territorio nacional y las ciudades importantes del país. La lucha esta vez se sucede en todo el territorio, trasladándose gran parte del conflicto al oriente, a Santa Cruz de la Sierra, donde concentraciones multitudinarias de colonos, campesinos e indígenas, bloquean por el norte y el sur a la ciudad. El desenlace de este conflicto, que parecía prosperar hacia una guerra civil es la capital del país, Sucre. El congreso se traslada a Sucre para poder sesionar, escapando de la sede de gobierno, la ciudad de La Paz, que se encontraba completamente convulsionada. Una vez arribados los parlamentarios a Sucre, la capital es tomada por los movimientos sociales. Los ayllus, los sindicatos campesinos, los maestros, organizaciones cívicas y de estudiantes, llegan en la tarde los mineros, quienes dan un ambiente de mayor beligerancia, enfrentándose con dinamitas a la policía. Llegan con un muerto, después de un enfrentamiento con el ejército, en las cercanías de la ciudad. El ambiente se encuentra completamente caldeado. En estas circunstancias, ante una gigantesca expansión del movimiento social, ante la evolución intensiva de los eventos, el desenlace no se deja esperar. El movimiento social para en seco la conspiración de la derecha. El resultado es otra sustitución constitucional, esta vez en la persona del presidente de la Corte Judicial. Ingresando con esto a una nueva coyuntura electoral, plagada de la huella de seis años de luchas sociales. Elecciones que deben garantizar la Asamblea Constituyente y el referéndum autonómico.

El panorama de los movimientos sociales, en lo que llamaremos la historia reciente, muestra ciertas tendencias, que es conveniente analizarlas. Una de ellas es la sorprendente acumulación de fuerzas que se ha dado lugar a lo largo de seis años de luchas sociales, desde la guerra del agua, abril del 2000, a la segunda guerra del gas, pasando de octubre del 2003 a mayo y junio del 2005. Este ascenso constante de los movimientos sociales exige una salida política. Esta salida política tiene que ver con trascender los horizontes históricos heredados, tanto por la República criolla, los períodos liberales, incluyendo el último período neoliberal, el modelo capitalista, en su cuarto ciclo, bajo la égida del ciclo norteamericano, particularmente en su versión dependiente, en lo que respecta a los países periféricos. Una Asamblea Constituyente, verdaderamente constitutiva, pensada como instrumento democrático del poder constituyente de las multitudes, parece ser una de las salidas a este proceso beligerante. Otra tendencia, que puede ser característica en esta historia reciente, es la preeminencia de las bases sociales, del control social, de la gestión asambleísta, impuesta por los actuales movimientos sociales. Esta situación nos muestra la emergencia de

modalidades de la democracia radical. Estas prácticas pueden repercutir en las nuevas formas de Estado que emerjan de la crisis. Otra tendencia, compartida por los países de la región, tiene que ver con la inclinación electoral a las nuevas versiones de la izquierda. En Bolivia esto tiene que ver con el crecimiento del Movimiento hacia el Socialismo (MAS). Otra característica, que parece ser particular de los países con presencia demográfica indígena, es el condicionamiento de la complejión cultural multinacional. Esto exige pensar la democracia en el contexto de las demandas de las nacionalidades, identidades colectivas y pueblos indígenas. Tomando en cuenta, por el momento, estas tendencias y estas características de los movimientos sociales, se observa también, que quizás debido a la rápida evolución de los acontecimientos, el desplazamiento de las luchas sociales no termina dibujando el perfil de los sujetos sociales, no termina de conformar un contenido político, no se culmina en un proyecto político. Se viven las circunstancias como vienen, improvisando y con propuestas inacabadas. Por esta razón es indispensable, construir espacios de deliberación y reflexión colectivos, que permitan consolidar lo ganado en términos de un intelecto general autonomizado, en el diseño de un proyecto político compartido.

Un encuentro en noviembre de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe puede coadyuvar a dos aspectos importantes en el fortalecimiento de los movimientos sociales:

- a) Lograr compartir experiencias locales, nacionales y regionales a escala continental.
- b) Lograr un análisis comparativo del recorrido de los movimientos sociales.